



GD-F-008 V.9

Página 1 de 5

**RESOLUCIÓN No. SSPD - 20174010214725 DEL 01/11/2017**

**“Por la cual se resuelve un recurso de reposición”**

**LA DIRECTORA TÉCNICA DE GESTIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, en el artículo 2.3.5.1.2.1.5. del Decreto 1077 de 2015, en la Resolución No. SSPD 20171300104825 de 2017, la Ley 1437 de 2011 y,

**CONSIDERANDO:**

**1. ANTECEDENTES**

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) de conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, mediante la cual “se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, es la entidad competente para adelantar el proceso de certificación relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico (SGP-APSB) o de retirarla según sea el caso, a los distritos y municipios del país.

Que el artículo 2.3.5.1.2.1.5. del Decreto 1077 de 2015, estableció que “La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelantará el proceso de certificación de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007”.

Que el Superintendente de Servicios Públicos mediante Resolución No. SSPD 20171300104825 de 29 de junio del 2017, delegó en la Directora Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado, entre otras funciones, la de expedir los actos administrativos a través de los cuales se certifique o descertifique a los municipios y distritos, en lo relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico, aclarar dichos actos y resolver los recursos que contra ellos se presenten.

Que el municipio EL CARMEN DE CHUCURÍ en el departamento de SANTANDER es de categoría 6 y como no fue prestador directo de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a 31 de diciembre de 2016, para obtener la certificación relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB, debía acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 2.3.5.1.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015.

Que mediante Resolución No. SSPD 20174010135075 del 2 de agosto de 2017, la SSPD decidió DESCERTIFICAR al municipio de EL CARMEN DE CHUCURÍ en el departamento de SANTANDER, por no haber cumplido el siguiente requisito previsto en el artículo 2.3.5.1.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015:

*“Reporte en el SUI de la certificación expedida por la Secretaría Técnica del Comité Permanente de Estratificación Municipal o Distrital o quien haga sus veces, en la que conste que la estratificación aplicada en la vigencia a certificar está conforme a la metodología nacional establecida”.*



Que, la Resolución No. SSPD 20174010135075 del 2 de agosto del 2017, fue notificada electrónicamente el 22 de agosto de 2017.

Que, el alcalde del municipio de El Carmen de Chucurí, mediante radicado número SSPD 20175290714052 del 1 de septiembre del 2017, presentó recurso de reposición en contra de la resolución de descertificación, en el cual solicitó el decreto de una prueba testimonial.

Que, mediante Auto No. SSPD 20174010002616 del 26 de octubre de 2017, este Despacho rechazó la práctica de la prueba testimonial solicitada por el ente territorial, por no ser conducente, pertinente y útil para demostrar el cumplimiento del requisito en cuestión, decisión comunicada al Alcalde mediante el oficio No. SSPD 20174011516161.

## **2. ARGUMENTOS DEL MUNICIPIO Y PRUEBAS APORTADAS CON EL RECURSO DE REPOSICIÓN**

**2.1** Como argumentos del recurso, se alegaron los siguientes por parte del ente territorial.

El recurrente señala, que a la fecha existe la certificación para acreditar el requisito incumplido y que versa sobre la aplicación de la estratificación para la vigencia 2016, la cual aduce fue debidamente expedida, pero que por un error involuntario se reportó en el SUI la certificación referida a la vigencia 2015, sin embargo, manifiesta que con el recurso anexa el documento correcto, por lo que considera que el municipio de El Carmen de Chucurí, dio cumplimiento a lo requerido por la norma.

Seguidamente sostiene que, en el derecho administrativo sancionatorio no basta con la comisión de la conducta reprochable para endilgar la responsabilidad, toda vez que se requiere que previamente se realice una valoración de la actuación, con miras a determinar el grado de participación del implicado, citando doctrina y jurisprudencia sobre el particular.

En este entendido considera, que la Superintendencia no puede en ningún caso proferir un acto administrativo sancionatorio sin dejar evidencia dentro del mismo de las pruebas existentes y que la base fundamental para enrostrar la sanción administrativa es la indisciplina por disentir al ente de control, lo cual alude no sucedió en este caso.

Por lo anterior, el recurrente solicita se revoque en su integridad la decisión que descertificó al municipio de El Carmen de Chucurí.

### **2.2. De las pruebas relacionadas en el recurso.**

Con el radicado No. SSPD 20175290714052 del 1 de septiembre del 2017, por medio del cual se sustentó el recurso de reposición, allegó el siguiente documento para que sea tenido en cuenta como prueba:

- Certificación suscrita por Ever Johan Barrera, que versa sobre la estratificación económica aplicada en el municipio de El Carmen de Chucurí para la vigencia 2016.

## **3. ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS**

Para determinar si le asiste razón a la parte recurrente, esta SSPD procederá a analizar los argumentos expuestos en el escrito de reposición, lo cual efectuará de la siguiente manera:

**Argumentos expuestos sobre el cumplimiento del requisito relacionado con el “Reporte en el SUI de la certificación expedida por la Secretaría Técnica del Comité Permanente de Estratificación Municipal o Distrital o quien haga sus veces, en la que conste que la estratificación aplicada en la vigencia a certificar está conforme a la metodología nacional establecida.”**

Este requisito se consideró incumplido, toda vez que el ente territorial reportó en el SUI extemporáneamente una certificación que versa sobre la estratificación aplicada en la vigencia 2015 y no sobre la evaluada (2016.)

Al respecto, el recurrente señala que a la fecha existe la certificación para acreditar el requisito incumplido, que trata sobre la aplicación de la estratificación para la vigencia 2016, la cual aduce fue debidamente expedida, pero que por un error involuntario se reportó en el SUI la certificación incorrecta, sin embargo, manifiesta que con el recurso anexa el documento correcto.

Frente a lo aducido por el ente territorial, sea lo primero advertir que el Decreto 1077 de 2015, dispuso en su artículo 2.3.5.1.2.1.9, que la fecha límite de reporte de la información para obtener la certificación que nos ocupa es el 30 de abril de cada año, no obstante, la Resolución No. 0222 del 26 de abril de 2017, amplió el plazo hasta el 2 de junio de 2017.

Para el caso concreto, el ente territorial efectuó el reporte de la información, el 15 de junio de 2017, es decir fuera del plazo establecido, en ese orden, y como se observa en la Resolución recurrida, el primer reproche que se le formula al municipio se encuentra relacionado con el reporte extemporáneo y, en segundo lugar, se le indicó que además la información cargada no se refiere a la vigencia 2016.

Veamos:

Comentario	Usuario	Fecha	Nombre Archivo
Certificación de la información reportada por parte del usuario.	ALC915_ADMIN	15/06/2017	
Certificado estratificación vigente	ALC915_ADMIN	15/06/2017	CertificadoEstratificacion.pdf

Así las cosas, resulta claro para este Despacho que el municipio no actuó con diligencia, toda vez que no cargó dentro del término establecido el documento que le permitiera acreditar este requisito, máxime cuando las normas procesales son de orden público de donde se desprende su obligatorio cumplimiento, tal como lo señala el artículo 13 del Código General de Proceso:

*"Las normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley."*

Al respecto, la Corte Constitucional<sup>1</sup> ha manifestado lo que sigue:

*"Pues bien, nótese cómo las leyes de estirpe procesal son de orden público y en consecuencia de obligatoria observancia. Sus dictados entonces son ajenos al querer de los individuos: particulares y funcionarios llamados a aplicarlas.", además advierte que "(...) En efecto, ha de repetirse, que la condición de normas taxativas que caracteriza las leyes que rigen los procedimientos es de inexorable acatamiento, máxime cuando estas normas constituyen un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del sistema normativo." (...) En este orden, los términos procesales se hacen tan imperativos que su cumplimiento, es una manifestación de uno de los principios sobre los cuales reposa el derecho procesal. Se trata del principio de la preclusión o de la eventualidad, el cual consiste en la clausura de las actividades que pueden llevarse a cabo dentro de cada etapa del proceso."*

Como consecuencia de lo expuesto, al dejarse vencer el término para reportar la información correcta en el SUI, la única decisión viable que puede tomar esta Superintendencia consiste en

<sup>1</sup> Corte Constitucional. Sentencia T - 213 del 28 de febrero 2008. MP Doctor Jaime Araújo Rentería.

descertificar al municipio de El Carmen de Chucurí, habida cuenta que no observó el plazo señalado por la norma.

De otra parte, y frente al error que aduce el recurrente sucedió al cargar una certificación incorrecta, es menester precisar que en esta sede no es de recibo aceptar tales argumentos, ni mucho menos la certificación que allega con el escrito de reposición, en atención a que como ya se mencionó la información no fue reportada dentro del término concedido por la norma, situación que impide entrar a contemplar consideraciones adicionales sobre el particular.

En este punto, cabe aclarar que aun si el municipio hubiese reportado la información correcta, tampoco acreditaba el requisito objeto de estudio, como quiera que, para cumplirlo debe no sólo cargar la información adecuada, sino también respetar los términos que la Ley fija para el efecto, situación que como se demostró no ocurrió en el presente asunto.

Ahora bien, en cuanto al proceso sancionatorio que invoca el recurrente y todos los pormenores que alrededor de este precisa, es importante poner de presente, que el proceso de certificación reviste una función meramente administrativa y no sancionatoria, de conformidad con lo señalado en el artículo 2.3.5.1.2.1.10. del Decreto 1077 de 2015, el cual dispone que esta entidad aplicará las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en lo que se refiere a la actuación administrativa, notificaciones, pruebas y recursos.

Conforme a lo anterior, el presente proceso no tiene como fin establecer o determinar responsabilidades por la violación al régimen de servicios públicos e imponer una consecuente sanción, sino que esta Superintendencia se limita a evaluar la información que el municipio reporta para acreditar el cumplimiento de los requisitos señalados en el Decreto 1077 de 2015, lo que a la postre deriva en la certificación o descertificación.

Así, de llegarse a la conclusión de que el municipio no cumplió con los requisitos establecidos en la ley, los recursos del SGP – APSB destinados inicialmente al municipio descertificado, se transfieren al departamento respectivo para que este los administre. Vale aclarar, que a pesar de que los recursos pasan a ser administrados por el ente departamental, este es el encargado de realizar todas las gestiones necesarias para garantizar la prestación eficiente de los servicios esenciales de agua potable y saneamiento básico en todo el municipio. Por esta razón, dicho proceso no se entienda como una actuación sancionatoria que implique un daño o detrimento patrimonial para el municipio recientemente descertificado.

Como corolario de lo expuesto, el ente territorial no logró desvirtuar el incumplimiento del requisito relacionado con el reporte de la certificación expedida por la Secretaría Técnica del Comité Permanente de Estratificación, por lo cual la decisión de descertificación será confirmada.

En mérito de lo expuesto, la Directora Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado,

#### **RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO. – CONFIRMAR** la Resolución No. SSPD 20174010135075 del 2 de agosto de 2017 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFICAR** personalmente de la presente Resolución al alcalde del municipio del CARMEN DE CHUCURI en el departamento de SANTANDER, haciéndole entrega de una copia de la misma, y advirtiéndole que contra ésta no procede recurso alguno. De no ser posible la notificación personal, se debe dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

**ARTÍCULO CUARTO. - COMUNICAR**, una vez en firme, el contenido de la presente Resolución al gobernador del departamento de SANTANDER, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y publicar en la página web de la SSPD.

**ARTÍCULO QUINTO.** - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria y contra ella no procede recurso alguno.

**NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá, D. C.



**BIBIANA GUERRERO PEÑARETE**

Directora Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado

Proyectó: Mara Steffan y Vanessa Benavides – Contratista Grupo de Certificaciones e Información  
Aprobó: Olga Rocío Yanquen Caro– Coordinadora del Grupo de Certificaciones e Información